

Expediente Núm. 158/2015  
Dictamen Núm. 170/2015

**V O C A L E S :**

*Fernández Pérez, Bernardo,*  
Presidente  
*García Gutiérrez, José María*  
*Zapico del Fueyo, Rosa María*  
*Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis*  
*Fernández Noval, Fernando Ramón*

Secretario General:  
*García Gallo, José Manuel*

El Pleno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2015, con asistencia de los señores y la señora que al margen se expresan, emitió el siguiente dictamen:

“El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a solicitud de V. E. de 17 de septiembre de 2015 -registrada de entrada el día 24 del mismo mes-, examina el expediente relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

De los antecedentes que obran en el expediente resulta:

**1. Contenido del proyecto**

El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se enuncian las normas en las que encuentra fundamento el Decreto en elaboración, concretamente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional; el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema

Educativo; el Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus Enseñanzas Mínimas, y el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Explica que corresponde al Gobierno fijar “los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación del currículo básico, que requerirán el 55 por 100 de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para aquellas que no la tengan”. Señala que el currículo, que se implantará en el curso escolar 2015-2016, “está dirigido a personas que ejercen o desean ejercer su actividad en los sectores biosanitarios y médico-legal, tanto en su vertiente analítica, como de investigación o asistencial”. Añade que las características de su contenido “ofrecen al alumnado (...) posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial”. Se cierra este preámbulo con una invocación expresa al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social; a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y a la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género, cuyos principios fundamentales se tratan de plasmar en la regulación del currículo del ciclo formativo objeto del proyecto de Decreto.

La parte dispositiva del proyecto se compone de siete artículos, todos ellos titulados, relativos, respectivamente, al “objeto y ámbito de aplicación”; a la “identificación, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores”; a los “objetivos generales”; a la “estructura y organización del ciclo formativo”; al “currículo”; a los “espacios y equipamientos”, y al “profesorado”.

Se incluyen en la norma cuya aprobación se pretende seis disposiciones adicionales, referidas, respectivamente, a la "oferta a distancia del ciclo formativo", a la "atribución docente para el módulo profesional de lengua extranjera para uso profesional en la familia profesional de sanidad", a la "accesibilidad universal en las enseñanzas del currículo", a los "elementos transversales en el desarrollo del currículo", a la "autorización para impartir las enseñanzas del ciclo formativo" y a la "oferta del ciclo formativo en la modalidad dual"; una disposición transitoria, que regula la "implantación de las enseñanzas del ciclo formativo", y dos disposiciones finales, la primera de las cuales contiene una "habilitación normativa" y la segunda alude a la "entrada en vigor".

Completan el proyecto de Decreto tres anexos, dedicados a la "duración de los módulos formativos y adscripción por cursos", al "currículo de los módulos profesionales" y a los "espacios y equipamientos mínimos".

## 2. Contenido del expediente

El procedimiento de elaboración de la norma se inicia con una memoria económica relativa a los gastos de personal suscrita el 20 de abril de 2015 por la Analista de Costes de Personal Docente con el visto bueno de la Jefa del Servicio de Plantillas y Costes de Personal. En ella se recoge que la implantación del nuevo ciclo formativo supone un incremento de "la dotación de profesorado en media jornada" en la especialidad "Formación y Orientación Laboral". Añade que el presupuesto de gastos aprobado para 2015 "cubre las necesidades estimadas, excluida la recuperación parcial de la paga extraordinaria del año 2012". Estima que "el bajo coste que se refleja para 2015 (...) puede ser asumido con cargo al presupuesto aprobado del ejercicio". Manifiesta que el incremento previsto para 2016 "deberá ser tenido en cuenta en el momento de elaboración del anteproyecto de presupuestos correspondiente".

El 15 de junio de 2015, la Jefa del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales firma una memoria económica en relación a gastos

de mobiliario y equipamiento en la que señala que “este ciclo formativo se implantará en el IES Isla de la Deva, donde se está impartiendo actualmente el ciclo formativo LOGSE de grado superior en Anatomía Patológica y Citología al que sustituye (...). Este centro dispone actualmente de los espacios y mobiliario adecuados para impartir el nuevo ciclo formativo y de una buena dotación en equipamiento específico. Por tanto, la implantación del ciclo formativo (...) no supondrá ninguna inversión ni incremento de gastos de funcionamiento en el IES Isla de la Deva”.

Obra en el expediente una memoria justificativa y una tabla de vigencias suscritas el 15 de junio de 2015 por la Directora General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa. En la primera se manifiesta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, artículos 6 bis 4 y 39.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y artículo 8.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y en atención a lo dispuesto en el Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas, “se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior conducente al título de Técnica Superior o de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico de aplicación en el Principado de Asturias”, que deberá implantarse en el “curso escolar 2015-2016”. Explica que “este ciclo formativo está dirigido a personas que ejercen o desean ejercer su actividad en los sectores biosanitarios y médico-legal, tanto en su vertiente analítica como de investigación y asistencial”. Añade que “los avances tecnológicos de los métodos de diagnóstico demandan una actualización en la formación de las y los profesionales de esta área”. Por último, destaca que “en la regulación del currículo de este ciclo formativo se ha tenido en cuenta la formación en ‘diseño para todas las personas’” y que “se ha pretendido superar estereotipos,

prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos”, teniendo en cuenta “el principio de igualdad entre mujeres y hombres”.

A la citada documentación, se adjunta un proyecto de decreto suscrito el 19 de junio de 2015 por la Jefa del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales con el visto bueno de la Directora General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa.

El 22 de junio de 2015, la citada Jefa de Servicio se dirige al Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la Consejería instructora para solicitarle la “tramitación urgente” del proyecto dado que “estos Decretos desarrollan el currículo de ciclos formativos que se implantarán en el curso 2015/2016”. Explica que “se ha detectado una discrepancia” entre la denominación que el artículo 10 y el anexo I del Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, atribuyen al módulo con código 1383, por lo que se ha optado por mantener la denominación prevista en el artículo 10, “a la espera de recibir respuesta a la consulta que se haga al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”.

Mediante Resolución de la titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 29 de junio de 2015, se ordena “el inicio del procedimiento para la elaboración del decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico”. En otra resolución de la misma fecha, la citada Consejera acuerda “Ordenar la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento”.

A continuación, se incorpora al expediente un “cuestionario para la valoración de propuestas normativas”, sin fecha ni firma.

El texto de la norma proyectada se remite, el día 29 de junio de 2015, al Consejo Escolar del Principado de Asturias y al Consejo de Asturias de la Formación Profesional, solicitándose la emisión de informe con carácter de urgencia por los respectivos órganos.

El Pleno del Consejo de Asturias de la Formación Profesional emite, con fecha 13 de julio de 2015, el informe solicitado, considerando que “se ajusta, en cuanto a fondo, a los contenidos y a los límites establecidos en la normativa orgánica y básica estatal señaladas”. Realiza dos observaciones formales al proyecto. En la primera, propone cambiar del título del Decreto de forma que en lugar de “Decreto por el que se establece el currículum del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico” se denomine “Decreto por el que se establece el currículum del ciclo formativo de grado superior de formación profesional de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico”. En la segunda, solicita una “revisión de lenguaje sexista para sustitución del mismo”.

Por su parte, el Pleno del Consejo Escolar del Principado de Asturias, en su reunión de 20 de julio de 2015, dictamina favorablemente el proyecto de Decreto. Realiza una única observación formal al título del Decreto en los mismos términos que la realizada por el Consejo de Asturias de la Formación Profesional.

El 27 de julio de 2015, la Subdirectora General de Orientación y Formación Profesional dirige un escrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte solicitándole una aclaración sobre la denominación del módulo con código 1383.

Mediante escrito de 29 de julio de 2015, el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la Consejería instructora requiere a la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales para que proceda a la “revisión de lenguaje no sexista” del texto proyectado.

En este momento se incorpora al expediente una nueva versión de la norma en proyecto.

Desde la Secretaría General Técnica de la Consejería proponente, a través de escritos de fecha 29 de julio de 2015, se solicita la emisión de informes a la Dirección General de Presupuestos y Sector Público y a la Dirección General de Función Pública y, el 6 de agosto del mismo año, se remite un texto del proyecto de Decreto a las Secretarías Generales Técnicas de

las restantes Consejerías que integran la Administración del Principado de Asturias.

El día 12 de agosto de 2015, el Director General de la Función Pública informa que “en la memoria económica (...) se hace constar que (...) el profesorado actual (...) podría asumir los cambios que supondrá la impartición del nuevo currículo, excepto en lo referido a la especialidad ‘Formación y Orientación’ laboral. Por esta causa será necesario incrementar la dotación de profesorado en media jornada”. Explica también que deberán adoptarse “medidas presupuestarias adecuadas” que cubran el mayor gasto derivado de la “recuperación de parcial de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012”. Añade que “por lo que se refiere al coste total anual a imputar a partir del ejercicio 2016, este deberá ser tenido en cuenta en el momento de elaboración del anteproyecto de presupuesto correspondiente”. Adjunta un cuadro resumen que refleja la variación de personal y su coste.

El 18 de agosto de 2015, la Analista Presupuestaria, con la conformidad del Director General de Presupuestos y Sector Público, suscribe un informe en el que señala que el centro público que impartirá el ciclo formativo “dispone actualmente de los espacios y mobiliario adecuados” por lo que no está prevista “ninguna inversión económica ni incremento de gastos de funcionamiento en el precitado centro”.

El 21 de agosto de 2015, la Jefa del Secretariado de Gobierno de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana suscribe un informe en el que señala que “en la disposición adicional segunda (...) se hace referencia a la ‘accesibilidad universal en las enseñanzas del currículo’. Se propone hacer referencia en todos ellos, a la disposición adicional sexta de los Reales Decretos correspondientes del Estado”. Plantea, además, subdividir en tres apartados la disposición adicional quinta.

Posteriormente, se incluye en el expediente una nueva versión de la disposición proyectada.

Con fecha 1 de septiembre de 2015, la Secretaria General Técnica de la Consejería instructora elabora un informe en relación con la norma proyectada,

en el que resume la tramitación efectuada y señala los aspectos básicos de su estructura y los fundamentos jurídicos en los que se apoya. En el mismo, además, se especifica la aceptación de las observaciones puntuales realizadas por el Consejo Escolar, por el Consejo de Asturias de la Formación Profesional y por la Consejería de Presidencia, informándose favorablemente la norma a efectos de su remisión al Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

El texto es analizado e informado favorablemente por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos el día 2 de septiembre de 2015, según certifica el Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana el mismo día, señalando que “analizado el proyecto de Decreto se remite al Consejo Consultivo del Principado de Asturias para emisión de dictamen”.

**3.** En este estado de tramitación, mediante escrito de 17 de septiembre de 2015, V. E. solicita al Consejo Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre consulta preceptiva relativa al proyecto de decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, significando la urgencia del mismo, adjuntando a tal fin copia autenticada del expediente original.

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes consideraciones fundadas en derecho:

**PRIMERA.-** Objeto del dictamen y competencia

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1, letra e), de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra e), del Reglamento de Organización y

Funcionamiento del Consejo, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a solicitud del Presidente del Principado de Asturias, en los términos de lo establecido en los artículos 17, apartado a), y 40.1, letra a), de la Ley y del Reglamento citados, respectivamente.

En la solicitud de dictamen se requiere a este Consejo que lo emita por el procedimiento de urgencia. El artículo 19, apartado 3, de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, ya citada, establece que "Cuando en la orden de remisión del expediente se hiciese constar motivadamente la urgencia del dictamen, el plazo máximo para su despacho será de quince días hábiles". En la orden de remisión se motiva la urgencia en la necesidad de aplicar el currículo en el curso académico 2015-2016. En atención a lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas, entendemos debidamente justificada la aplicación de la tramitación de urgencia. En consecuencia, el presente dictamen se emite dentro del plazo de quince días hábiles dispuesto en el artículo 19, apartado 3, de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, reguladora de este organismo, para las consultas en las que se invoquen motivos de urgencia.

**SEGUNDA.-** Tramitación del procedimiento y contenido del expediente

La elaboración de disposiciones de carácter general se rige por lo dispuesto en el capítulo V de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias (en adelante Ley de Régimen Jurídico del Principado de Asturias).

El artículo 32 establece, en su apartado 1, que "El procedimiento para la elaboración de disposiciones administrativas de carácter general y anteproyectos de ley se iniciará por resolución motivada del titular de la Consejería que ostente la competencia en la materia respectiva, por iniciativa propia o a propuesta de los distintos centros directivos de la misma". El apartado 2 del citado artículo dispone que "Deberá incorporarse necesariamente al expediente la memoria expresiva de la justificación y

adecuación de la propuesta a los fines que persiga la norma y la incidencia que habrá de tener ésta en el marco normativo en que se inserte. Se incorporarán igualmente los estudios e informes previos que hubieren justificado, en su caso, la resolución o propuesta de la iniciativa, así como la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y disposiciones que pudieran resultar afectadas y, en su caso, estudio acreditativo del coste y beneficio que haya de representar”.

El procedimiento para la elaboración del Decreto cuyo proyecto analizamos se inicia por Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte de 29 de junio de 2015.

Al expediente se han incorporado una memoria justificativa de la propuesta y una tabla de vigencias elaboradas el 15 de junio de 2015 por la Directora General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Normativa. Asimismo, consta una memoria económica suscrita en la misma fecha por la Jefa del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales y una memoria económica relativa a gastos de personal firmada ya el 20 de abril de 2015 por la Analista de Costes de Personal Docente con el visto bueno de la Jefa del Servicio de Plantillas y Costes de Personal. Debemos señalar que estos documentos se unen anticipadamente al expediente, pues se aportan al procedimiento con anterioridad a la resolución de inicio. Al respecto, este Consejo Consultivo viene reiterando la necesidad de respetar escrupulosamente lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en especial la competencia del titular de la Consejería para disponer el inicio del procedimiento, al que debe seguir la fase de tramitación. Por lo demás, se han incorporado al expediente los pertinentes informes.

A tenor de lo establecido en el apartado 4 del artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico del Principado de Asturias, las “propuestas de disposiciones generales serán informadas por la Secretaría General Técnica de la Consejería. Por decisión del titular de la Consejería competente podrán someterse a informe del Servicio Jurídico del Principado de Asturias”, añadiendo el apartado

5 que “Cuando por razón de la importancia de la materia objeto de regulación o por aplicación de lo preceptuado en las disposiciones vigentes, sea preceptivo o, en su caso, se entienda conveniente, el proyecto de disposición será sometido a dictamen de los órganos consultivos correspondientes”.

El proyecto se ha sometido al informe preceptivo del Consejo Escolar del Principado de Asturias, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1.b) de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, Reguladora del Consejo Escolar del Principado de Asturias. También, se ha solicitado informe del Consejo de Asturias de la Formación Profesional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.e) del Decreto 78/2000, de 19 de octubre, por el que se regula el Consejo de Asturias de la Formación Profesional. Ambos órganos realizaron una sugerencia de carácter formal en cuanto al título de la disposición.

Consta la remisión del proyecto a las diferentes Consejerías que integran la Administración del Principado de Asturias en trámite de observaciones, habiendo sido formuladas algunas de carácter formal por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

Sobre las distintas sugerencias planteadas, resulta cuestionable la falta de documentación explicativa respecto a los cambios introducidos en los sucesivos borradores del proyecto, lo que obliga a este Consejo a comparar directamente los textos a fin de obtener información sobre las modificaciones sufridas en algunas fases del procedimiento; en concreto, en lo que se refiere a la identificación de los cambios producidos como consecuencia de las observaciones planteadas por el Consejo Escolar del Principado de Asturias, por el Consejo de Asturias de la Formación Profesional y por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, cuya única referencia a su estimación se encuentra en el informe emitido por la Secretaria General Técnica en un momento de la tramitación muy posterior a la incorporación de las mismas al texto proyectado.

Como indicamos, consta la emisión de un informe por la Secretaria General Técnica de la Consejería proponente en relación con la tramitación efectuada y sobre la justificación de la norma que se pretende. Asimismo, el

texto ha sido informado favorablemente por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos.

Visto lo anterior, debemos señalar que la tramitación del proyecto resulta acorde, en lo esencial, con lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias (en adelante Ley de Régimen Jurídico del Principado de Asturias).

No obstante, y teniendo en cuenta que se ha acordado la tramitación de urgencia, este Consejo Consultivo considera necesario recordar que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece una serie de cautelas legales en orden a la adecuada tramitación administrativa, entre otras, la impulsión simultánea de trámites, junto con la obligación de consignar el plazo legal en que hayan de ser cumplidos (artículo 75, "Celeridad") y la necesidad de que los informes sean evacuados en plazo, debiendo proseguirse la tramitación en el supuesto de que no sean emitidos en dicho plazo, salvo en los casos de informes preceptivos y determinantes para la resolución (Artículo 83, "Evacuación"); principios rectores del procedimiento administrativo que no siempre se observaron en el supuesto que analizamos y cuya desatención alcanza singular trascendencia en una tramitación declarada de urgencia.

### **TERCERA.-** Base jurídica y rango de la norma

El Principado de Asturias ostenta, conforme a lo establecido en el artículo 18 de su Estatuto de Autonomía, competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades estatales en la materia.

El artículo 149.1.30.<sup>a</sup> de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la "Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el

desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia”.

En el ámbito de la competencia estatal, el artículo 39, apartado 6, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala que el “Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas”. Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 10.1, dispone que la “Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.<sup>a</sup> y 7.<sup>a</sup> de la Constitución, y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales”.

El citado marco normativo se completó con la aprobación del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, posteriormente derogado por el vigente Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. Conforme a lo previsto en esta norma se dictó el Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas. Esta disposición, que tiene carácter básico, contiene en su disposición final segunda un mandato dirigido a las Administraciones educativas, conforme al cual “Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en el curso escolar 2015-2016”.

Por otro lado, el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. Por su parte, el artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone que “Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo

de las enseñanzas reguladas en el presente real decreto, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado. Para ello, se contará con la colaboración de los interlocutores sociales”.

A la vista de lo expuesto, consideramos que, a tenor de las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía, el Principado de Asturias resulta competente para dictar la norma reglamentaria objeto de este dictamen y, asimismo, que el rango de la norma en proyecto -decreto- es el adecuado, a tenor de lo establecido en el artículo 25.h) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 21.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

#### **CUARTA.-** Observaciones de carácter general al proyecto

##### I. Ámbito material de la norma.

De una primera comparación entre el título competencial y el contenido concreto del proyecto de Decreto, debemos concluir que no se aprecia objeción en cuanto a la competencia de la Comunidad Autónoma, que encuentra su apoyo en las asumidas en nuestro Estatuto de Autonomía.

##### II. Técnica normativa.

Si bien en anteriores ocasiones –Dictamen Núm. 232/2014, entre otros-, hemos señalado que la técnica normativa de la remisión, pese a la evidente ventaja de la autenticidad del enunciado al que se reenvía, tiene “el inconveniente de no hacer funcional su consulta, obligando al manejo simultáneo de las normas de referencia” y “conlleva el peligro de que la remisión a un artículo o artículos de una disposición pueda quedar privada de sentido si esos artículos cambian de ubicación o si la norma de referencia queda derogada”, la especialidad de la materia que se somete a consulta nos

ha llevado a afirmar en casos de igual naturaleza al que nos ocupa –por todos, Dictamen Núm. 218/2014-, que la técnica normativa empleada, caracterizada por la remisión a textos normativos ya vigentes –aunque aquella sea de carácter específico- y no por su reproducción, merece un juicio favorable.

Dentro de la claridad que ha de exigirse al proyecto, resulta necesario el examen de si su redacción resulta conforme con las pautas que rigen el sistema de producción normativa en la Comunidad Autónoma, la Guía para la elaboración y control de disposiciones de carácter general, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de julio de 1992. En este sentido, se advierten determinados defectos de carácter general en su redacción cuya escasa entidad no debería llevar a prescindir de su corrección.

En general, y por lo que se refiere a los aspectos tipográficos, recomienda la citada Guía dejar una sangría al comenzar la primera línea de todo párrafo, manteniendo siempre la misma, y utilizar dos líneas en blanco entre artículo y artículo.

También sugerimos revisar la ortografía, la gramática y la sintaxis del texto del proyecto. Sin pretender una enumeración exhaustiva, en el apartado segundo del preámbulo de la norma debe sustituirse “citerior” por “criterios”. En cuanto al uso de mayúsculas, la disposición adicional segunda se refiere al “módulo profesional de Lengua extranjera” debiendo reconsiderar el uso de la mayúscula en la denominación completa de la asignatura o, en caso contrario, prescindir de ella. Igual precisión debe hacerse en cuanto a la expresión “texto Refundido” en el décimo primer párrafo del preámbulo.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en la referida Guía, los anexos “se numerarán en ordinales escritos en letra mayúscula” por lo que la propuesta de numeración de los anexos con números romanos deberá ser sustituida por la fórmula señalada. Igualmente, deberán corregirse en este sentido las remisiones a los anexos contenidas en los artículos 4.2, 5 y 6 y en la disposición transitoria única del texto proyectado.

## **QUINTA.-** Observaciones de carácter singular al proyecto

### I. Sobre la parte expositiva.

A tenor de lo establecido en las Directrices de técnica normativa contenidas en la Guía para la elaboración y control de disposiciones de carácter general, “el preámbulo responderá al porqué, a la justificación de la disposición, declarará breve y concisamente sus objetivos, aludirá a sus antecedentes y a las competencias en cuyo ejercicio se dicta”.

El texto propuesto satisface estos requisitos. Sin embargo, entendemos conveniente realizar algunas precisiones. Así, cuando hace referencia al contenido mínimo del currículo básico establecido por el Gobierno en atención a lo dispuesto en el artículo 6 bis 4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será suficiente con que se refiera al porcentaje señalado para las Comunidades Autónomas que no tengan lengua cooficial, al exceder el otro supuesto mencionado del ámbito que nos ocupa. Igualmente, dos razones aconsejan replantear la redacción del párrafo en el que se señala que el ciclo formativo ofrece al alumnado “posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial”. La primera es que la mención a la obtención de empleo “en todo el territorio del Principado de Asturias” parece circunscribir la validez de la titulación únicamente a este ámbito territorial, por lo que deberá aclararse esta expresión. La segunda es que la inclusión de un módulo de emprendimiento no responde al desarrollo normativo autonómico sino que viene establecido por lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, y se fijan sus enseñanzas mínimas. Por ello, y pese a la naturaleza no prescriptiva del preámbulo, consideramos que también este debería clarificar los contenidos propios y los estatales. Igualmente, debe clarificarse el carácter estatal o autonómico de la normativa estatal, orgánica y de bases, que el preámbulo recoge alterando, en algunos casos, su literalidad,

y en todos ellos sin que de la lectura del texto se pueda deducir con claridad cuál sea el contenido concreto de la norma que se cita.

## II. Sobre la parte dispositiva.

El artículo 2 remite a los preceptos correspondientes del Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, la regulación relativa a “la identificación del título”, su “perfil”, “entorno profesional” y “prospectiva”. Consideramos innecesaria la precisión de que “el perfil profesional” “se determina por la competencia general, por las competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y por las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título”, pues tal contenido no es sino reproducción del artículo 3 del Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, al que el mismo artículo 2 remite, entre otros.

En cuanto a la denominación del módulo con código 1383 recogida en el artículo 4.2.i) del proyecto, así como en su anexo segundo, nos parece adecuado el criterio adoptado, debiendo estar, no obstante, a lo que pudiera señalar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con carácter previo a la aprobación del proyecto sometido a dictamen.

## III. Sobre la parte final del proyecto.

La disposición adicional tercera, bajo el título “Accesibilidad universal en las enseñanzas del currículo”, dispone que “con el objeto de facilitar la accesibilidad universal en el entorno donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se tendrá en cuenta la adecuación de las instalaciones, instrumentos y recursos utilizados que permita la incorporación de las personas con discapacidad a las actividades programadas”. Como consecuencia de las observaciones formuladas por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, el texto contiene una remisión a la “disposición adicional sexta del Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre”. El apartado 1 de esta disposición se refiere a las competencias en “diseño para todas las personas”, mientras que

su apartado 2 regula efectivamente la “accesibilidad universal de las personas con discapacidad”, para lo que remite a la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Sin embargo, esta última remisión no es técnicamente afortunada, pues en el momento en el que se aprobó el Real Decreto 767/2014, la Ley 51/2003 había sido derogada por la disposición derogatoria única b) del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Dado el carácter básico del Real Decreto, sólo cabe resignarse a convivir con esta imprecisión, que la normativa estatal más reciente corrige, como prueba la remisión que la Disposición adicional sexta del Real Decreto 838/2015, de 21 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Electromedicina Clínica y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE del 6 de octubre), pretende hacer ahora a la disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aunque atribuya dicha disposición al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba aquel. No obstante, la norma proyectada podría aclarar este panorama si en su parte expositiva alude genéricamente a que tanto la “accesibilidad universal” como el “diseño para todas las personas” se garantizan en los términos que establece el Texto Refundido citado.

La disposición adicional quinta, “Autorización para impartir las enseñanzas del ciclo formativo” señala, en su apartado tercero, que los centros “que hubieran sido autorizados para impartir las enseñanzas del ciclo formativo de grado superior en Anatomía Patológica y Citología, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 550/1995, de 7 de abril por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología y deseen ofertar las enseñanzas reguladas en el presente decreto, deberán solicitar la

adaptación según el procedimiento que establezca la Dirección General competente en la autorización de unidades y centros de titularidad pública y privada”. En relación con este último inciso, y sin necesidad de analizar la corrección jurídica de que se pretenda atribuir una facultad como la referida a una Dirección General, no parece justificado que se establezca un “procedimiento” de adaptación distinto al contemplado en los restantes apartados de la disposición, consistente en la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente sobre las enseñanzas -ya se trate de “centros docentes públicos de titularidad del Principado” o de “centros docentes públicos de titularidad de otras administraciones públicas y los centros docentes de titularidad privada ubicados en el ámbito territorial del Principado de Asturias”-. Consideramos, por tanto, suficiente una referencia a la obligatoriedad de cumplimiento de tales requisitos por parte de los centros mencionados (esto es, los “autorizados para impartir las enseñanzas de grado superior” con arreglo a la regulación anterior), “previa solicitud ante la Consejería competente en materia educativa”.

La disposición transitoria, relativa a la implantación de las enseñanzas del ciclo formativo, ordena la implantación del currículo en el año académico 2015-2016. Dado que el curso escolar se inició el pasado 1 de septiembre de 2015, conforme a lo previsto en la Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el Calendario Escolar para el curso 2015-2016, resultará necesario, en caso de haberse procedido a la implantación efectiva del currículo, dotar a la norma de eficacia retroactiva, debiendo adaptarse en ese caso la redacción de la disposición final segunda.

#### IV. Sobre los anexos.

No se formulan observaciones sobre el anexo II ya que, como manifestamos en nuestro Dictamen Núm. 138/2015, “en el caso concreto de normativa técnica compleja y extensa, como son los anexos que incorporan los

currículos básicos de las diferentes etapas educativas, hemos insistido en la necesidad de que estos recojan fielmente los contenidos básicos de aplicación; cuestión en la que la Administración educativa ha de ser en extremo cuidadosa y sobre cuyo resultado este Consejo no se pronuncia, pues su labor no alcanza a las labores de cotejo de los anexos técnicos aun cuando tengan carácter básico”.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictamina que el Principado de Asturias ostenta competencia para dictar la norma proyectada y que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este dictamen, puede someterse a la aprobación del órgano competente.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Gijón, a .....

EL SECRETARIO GENERAL,

V.º B.º

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.